



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: DORIS EDILIA MEDINA OCHOA
Demandados: ACP COLPENSIONES; PROTECCIÓN S.A.; PORVENIR S.A., y COLFONDOS S.A.
Radicado: 05001 31 05 013 2019 00198 01
Sentencia: S-141

AUTO

En atención a la escritura pública 584 del 13 de marzo de 2017, conocida según certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, se le reconoce personería como apoderada judicial de COLFONDOS S.A. a la Dra. DEIBY CANIZALES ERAZO, T.P. 132.014 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta última, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 23 de septiembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

DORIS EDILIA MEDINA OCHOA demandó a las entidades enunciadas, pretendiendo se DECLARE la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad realizado inicialmente a PORVENIR S.A., lo que comprende los posteriores traslados a COLFONDOS S.A. y a PROTECCIÓN S.A., para que, en consecuencia, se declare que permaneció afiliada sin solución de continuidad en el Régimen de Prima Media, ordenando el traslado a COLPENSIONES de la totalidad de cotizaciones realizadas junto con los rendimientos financieros, frutos, intereses, comisiones, sumas adicionales, etc., además de que se condene en costas a las entidades demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 1 de marzo de 1965; que al comenzar su vida laboral estuvo afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; que el 20 de mayo de 1994 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual a través de la AFP PORVENIR S.A.; que posteriormente se trasladó a la AFP COLFONDOS el 25 de enero del año 2010; que más adelante, el 30 de marzo de 2016, se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A.; y que al momento de su traslado de régimen no recibió una información completa y necesaria, ni se le puso en conocimiento las diferencias en la mesada pensional que podría alcanzar en cada régimen, así como tampoco le explicaron la forma de construir la pensión y la incidencia de tener beneficiarios en el valor final que pudiera llegar a alcanzar.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, además de su afiliación a esa entidad, indicando frente a los demás hechos que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso a las pretensiones ya que la demandante no cumple con los requisitos legales para determinar la viabilidad de la ineficacia de traslado. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

PROTECCIÓN S.A. en su respuesta a la demanda, admitió la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación inicial al ISS y el traslado a esa entidad en marzo de 2016, indicando que no le consta lo relacionado con otras entidades por no ser de su conocimiento. Explica que a la demandante se le dio una asesoría integral y completa respecto de las características, ventajas y desventajas de ambos regímenes según el conocimiento técnico con que cuentan todos sus asesores. Se opuso a las pretensiones por tratarse de un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento y propuso como excepciones inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe y aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del Sistema General de Pensiones.

COLFONDOS S.A., también acepta lo relacionado con la fecha de nacimiento de la demandante, así como la afiliación a esa entidad en enero de 2010, indicando frente a los demás hechos que no le constan por tratarse de situaciones de terceros que no pueden ser negados o aceptados, advirtiendo que en todo caso la asesoría que como entidad brinda a sus potenciales afiliadas es completa, incluyendo lo relacionado con las ventajas y desventajas del RAIS con una comparación con el RPM. Se opone además a las pretensiones y como excepciones plantea las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, no existe prueba de causal de nulidad alguna,

prescripción, buena fe, compensación, pago, saneamiento de cualquier presunta nulidad de la afiliación, ausencia de vicios del consentimiento y obligación a cargo exclusivamente de un tercero.

Finalmente, PORVENIR S.A. acepta únicamente la afiliación de la demandante a esa entidad, en tanto los demás hechos tienen que ver con terceros que solo frente a ellos se pueden constatar. Aclara eso sí, que la afiliación se produjo luego de dar cumplimiento al deber de información en donde se le manifestaron las condiciones de acceso a la pensión de vejez y las características propias del RAIS. Con base en esos mismos argumentos se opuso a las pretensiones de la demanda y como excepciones propone prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación, buena fe y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2020, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia de la afiliación de la demandante a PORVENIR S.A. así como su posterior movilidad a COLFONDOS S.A. y a PROTECCIÓN S.A., ordenando su regreso a COLPENSIONES sin solución de continuidad. Ordenó además a todas las entidades reintegrar la totalidad de valores recibidos durante el tiempo de afiliación de la demandante a cada una de ellas, y a PROTECCIÓN S.A. trasladar el saldo total existente en la cuenta de ahorro individual, incluyendo los rendimientos financieros. Finalmente impuso costas a cargo de PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$1`900.000.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, PORVENIR S.A. interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia en su integridad, ya que para la fecha de traslado la demandante tuvo la oportunidad de tener

una asesoría y realizar preguntar sobre el régimen, informándose acerca de la posibilidad de heredabilidad de sus aportes, adoptando una decisión y suscribiendo el formulario según las exigencias legales para la época, de modo que sí es posible concluir que se cumplieron los requisitos para la fecha respecto a la información verbal que se tenía que suministrar. De mantenerse la decisión, solicita se revoque la orden de trasladar los gastos de administración y seguros previsionales, ya que con el paso de la demandante a la AFP PROTECCIÓN, se entregaron todos los recursos existentes en la cuenta de ahorro individual.

A su turno, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. sostiene que, si se pretende asumir que la afiliación nunca existió, se debe emitir una condena congruente con el efecto que se persigue, ya que de no haber existido esa afiliación no se habrían generado rendimientos, ni pagado seguros previsionales, así como tampoco cuotas de administración. Esos rendimientos deben ser conservados por esa razón. Además, de haber permanecido en el Régimen de Prima Media, COLPENSIONES también habría descontado los mismos porcentajes destinado a la administración y seguros, sin que de ninguna manera sea posible su traslado a esa entidad.

Finalmente, COLPENSIONES solicita que se ordene la devolución de todos los conceptos recibidos por cada una de las AFP en donde estuvo afiliada la demandante, incluyendo cuotas de administración, seguros previsionales y porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, todo lo cual debe incluir la respectiva indexación por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó sus alegatos de conclusión advirtiendo que el traslado realizado por la demandante al RAIS, se hizo de forma

voluntaria y sin su injerencia, siendo responsabilidad de los fondos privados brindar una completa, necesaria y transparente asesoría, lo que en el proceso quedó demostrado que no ocurrió. Además, al momento en que la accionante realizó solicitud de traslado ante COLPENSIONES, se encontraba incurso en la prohibición legal del literal e, artículo 2 de la ley 797 del año 2003. De mantenerse la orden de primera instancia, solicita la devolución y reintegro de los recursos de la cuenta de ahorro individual, cuotas de administración, cuotas abonadas al fondo de garantía mínima, rendimientos, anulación de bonos pensionales si existieren, porcentaje destinado al pago de seguros provisionales y gastos de administración, adicionalmente que dichos valores se entreguen de manera indexada dada la evidente pérdida del valor de la moneda, para lo cual cita como sustento las sentencias 31989 de 2008, SL 17595 de 2017, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019 y SL 1688 de 2019.

PORVENIR S.A. por su parte, señaló que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley. Asegura que al momento de realizar el traslado cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues le entregó a la parte actora la información del Régimen en diferentes momentos, esto es, de manera verbal en una reunión general y colectiva, y de forma personal al momento de suscribir el formulario de afiliación. Agrega que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación, son obligaciones posteriores, surgidas a partir de los años 2010 y 2014. En caso de dejar en firme la decisión de declarar la ineficacia de la afiliación, solicita se revoque la orden de traslado de los dineros descontados por gastos de administración, ya que son sumas que tienen por mandato legal una destinación específica que se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993.

Finalmente, la apoderada de COLFONDOS afirma que el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que está destinado a cumplir el principio de solidaridad, que irradia el Sistema General de Pensiones, fue traslado a la AFP a la cual decidió afiliarse la actora, luego de su vinculación a COLFONDOS, por lo que no se le puede ordenar que pague dos veces un mismo concepto. De otro lado, el pago de las pólizas previsionales de invalidez y muerte, está destinado al cubrimiento de estas contingencias, por lo que la demandante estuvo amparada por dichos riesgos en vigencia de su afiliación a esa entidad, por lo que la contratación respectiva de esas pólizas cumplió su específica destinación y en todo caso, esos porcentajes no serían factores de financiación de pensión de vejez en Prima Media.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de las demandadas PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES a través de los recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de aquella última -en los temas que la afectan- con el objeto de salvaguardar los intereses de la entidad, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la señora DORIS EDILIA MEDINA OCHOA realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A., quedan en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** DORIS EDILIA MEDINA OCHOA nació el 1 de marzo de 1965 (fl. 63); **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el ISS y comenzó a realizar cotizaciones el 11 de marzo de 1994, acumulando en esa entidad un total de 159.43 semanas fl. 20; **(iii)** el 20 de mayo de 1994 suscribió el

formulario de afiliación a la AFP PORVENIR S.A., con efectos desde el 1 de junio de ese mismo año, fl. 9; **iv)** posteriormente se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A., según formulario de vinculación radicado el 25 de enero de 2010, fl 10; y **v)** finalmente se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A., según formulario del 30 de marzo de 2016, entidad en la que se encuentra afiliada actualmente - fl. 11.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por las AFP PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A., y PROTECCIÓN S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores de los fondos privados, dado que, al momento de tramitar el traslado, no tuvieron en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliada o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliada (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para la afiliada de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por

trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes de la afiliada y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información al afiliado, al no suministrarle, *“en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen”* (SL 1689-2019).

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].**”*

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar la devolución de la totalidad de aportes recibidos, tema cuestionado en los recursos de apelación de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., así como en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y***

con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima" (Resaltado por la Sala).

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado "... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de

afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...".

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

(...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA, incluyendo la orden a todas las entidades que tuvieron como afiliada a la señora DORIS EDILIA MEDINA OCHOA, para que procedan con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración o comisiones, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que aquella estuvo vinculada a cada entidad.

Se advierte eso sí, que la orden impuesta a todas las entidades del régimen privado de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, debe incluir la respectiva indexación, según la ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y según se solicita por COLPENSIONES, tanto en el recurso de apelación, como en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, por lo que en

este aspecto puntual la decisión de primera instancia deberá ser ADICIONADA.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., ordenando a cada una de ellas el pago por concepto de agencias en derecho la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 23 de septiembre de 2020, pero la **ADICIONA** en el sentido de ordenarle a las AFP PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A., que la orden de traslado de los conceptos recibidos durante la afiliación de la demandante a cada entidad, como cuotas de administración, porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., ordenando a cada una de ellas el pago por concepto de agencias en derecho la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 113
del 30 de junio de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **77f7bd2dc5f462f39938670a6586d4a6b8d8917d26eb57194aaf89ec8363cfc7**

Documento generado en 29/06/2021 11:33:59 AM